

PROPOSICIÓN

Modifíquese el artículo 23° del proyecto de ley número 027/21 Cámara – 046/21 Senado *“Por la cual se expide la ley de inversión social y se dictan otras disposiciones”* el cual quedara así:

ARTÍCULO 23° MATRÍCULA CERO Y ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR. Créese la política de Estado de *Matrícula Cero* como beneficio permanente a favor de los estudiantes en condición de pobreza, pobreza extrema o vulnerabilidad, destinando anualmente los recursos para atender las necesidades de los jóvenes que vayan a cursar o estén cursando programas de educación técnica, tecnológica y superior en Instituciones de Educación Superior Públicas, mediante el pago del cien por ciento (100%) del valor de la matrícula universitaria.

Los recursos para la financiación de la política referida en el inciso anterior se dispondrán a través de Generación E, otros programas de acceso a la educación superior pública, el fondo solidario para la educación creado mediante el Decreto Legislativo 662 de 2020, los recursos que determine el Ministerio de Educación Nacional con base en los saldos y excedentes que reporten sus entidades adscritas y vinculadas, recursos provenientes de los traslados presupuestales que autorice la ley y el reglamento y de otros fondos del orden nacional.

Adicionalmente, el Gobierno Nacional podrá coordinar con las entidades territoriales mecanismos de cofinanciación para lograr los fines del presente artículo.

El Gobierno Nacional fijará, a partir de las fuentes señaladas en el inciso anterior, las condiciones bajo las cuales garantizará anualmente los recursos para el pago total de la matrícula de los estudiantes en condición de pobreza, pobreza extrema o vulnerabilidad de las Instituciones de Educación Superior Públicas, en programas de pregrado de educación técnica profesional, tecnológica y universitaria, así como las condiciones de priorización y focalización de estos recursos.

El ICETEX y las entidades públicas del orden nacional que hayan constituido fondos y/o alianzas con éste para el desarrollo de programas de acceso a la educación superior, podrán otorgar estímulos, y adoptar planes de alivio, de conformidad con las normas que regulen la materia. Lo anterior podrá ser implementado por las entidades públicas del orden territorial en el marco de su autonomía.

PARÁGRAFO 1. Los recursos que se destinen de conformidad con lo dispuesto en este artículo, deberán incrementarse anualmente según el Índice de Precios al Consumidor –IPC- del año inmediatamente anterior, para garantizar la sostenibilidad de la política.

PARÁGRAFO 2. El Gobierno Nacional reglamentará la presente ley dentro de los seis (6) meses siguientes contados a partir de su promulgación

JUSTIFICACIÓN

Esta proposición busca crear, con carácter de permanencia, la política pública de matrícula cero a favor de los estudiantes en condición de pobreza, pobreza extrema o vulnerabilidad que estén cursando o vayan a cursar programas de pregrado en la Instituciones de Educación Superior Públicas.

A raíz de la emergencia sanitaria decretada en marzo de 2.020 por el Gobierno Nacional como consecuencia de la pandemia de COVID – 19, las realidades y necesidades sociales y económicas a nivel mundial se han hecho más evidentes, desafiando todo tipo de modelo económico y estructura política y exigiendo un nivel de asistencia social que no habíamos evidenciado en los últimos 100 años.

En nuestro país el nefasto impacto de esta situación sanitaria, representó para los hogares colombianos una disminución equivalente a 33,8 billones de pesos por concepto de ingresos para el año 2.020 conforme lo reveló un estudio realizado y publicado por la Asociación de Instituciones Financieras (ANIF).

Según el estudio, al tiempo que las medidas de aislamiento y de cierre económico aumentaban, así también decrecían los ingresos de los hogares colombianos y solo hasta marzo del año 2.021, se percibió un aumento en los ingresos equivalente a \$300.000 millones, lo cual quiere decir que, las familias colombianas, soportaron un decrecimiento sostenido de sus ingresos por 12 meses continuos.

Ante la precaria situación económica de los hogares y ante la necesidad de satisfacer primordialmente las necesidades básicas en alimentación, vivienda y vestido, el nivel de deserción universitaria para el segundo semestre del año 2.020 aumentaría según un estudio realizado por WorkUniversity, en un 24% del cual, 62,5% correspondería a la imposibilidad de matricularse por razones económicas, 20% en razón de las clases virtuales, 12% por no contar con internet y computador y 4,2% por no encontrar un lugar para llevar a cabo las prácticas profesionales.

Dichas cifras las confirma la encuesta de seguimiento y prospectiva de las actividades académicas de la Universidad Nacional de Colombia para 2.020, en la que se estimó de una muestra de 10.582 estudiantes, que el 40% no contaba con los recursos para pagar su matrícula y el 68%, debido a sus condiciones económicas, se les dificultaba el desarrollo de las clases virtuales o tenían dificultades para el acceso a internet y a los dispositivos tecnológicos que facilitaban su conexión a las sesiones virtuales..

La deserción universitaria es, sin duda alguna, uno de los principales problemas que esta crisis sanitaria ha profundizado, pero que viene gestándose desde hace muchos años debido a la indiferencia institucional y presupuestal. Basta con señalar que, según la Universidad Nacional de Colombia, la tasa de deserción de las cohortes de 2015 a 2020 en pregrado fueron del 9,9% y las de desvinculación del 12,4%, luego no es un problema que se haya gestado como

consecuencia de la pandemia, sino que, insistimos, ya se venía gestando y sencillamente se hizo más visible dentro de las múltiples exigencias sociales que salieron a relucir en esta grave crisis.

Este grave panorama de deserción estudiantil debido a la ausencia de recursos económicos para iniciar o continuar con los programas universitarios, exige del Estado una respuesta institucional y económica que sea lo suficientemente contundente para garantizar la educación como servicio público inherente a la finalidad social del Estado bajo los términos del artículo 365 superior.



CARLOS A. TRUJILLO GONZÁLEZ
SENADOR DE LA REPUBLICA.



HORACIO JOSÉ SERPA MONCADA
SENADOR DE LA REPÚBLICA



RUBY HELENA CHAGÜI SPATH
SENADORA DE LA REPÚBLICA